

Suscríbese al Boletín mensual del WRM

<http://wrn.us9.list-manage1.com/subscribe?u=f91b651f7fecdf835b57dc11d&id=9615b4bc94>

NUESTRA OPINIÓN

¿Qué "derechos" son defendidos en el Acuerdo de París y en los planes con falsas soluciones a la crisis climática?

Se han realizado muchos análisis sobre el Acuerdo de París y sobre las razones por las cuales este es un desastre para el clima. Una de las críticas es que el Acuerdo no hace referencia al tema fundamental de los derechos humanos. Sin embargo, cabe resaltar que, más allá del texto en sí, el Acuerdo garantiza y fortalece los derechos de las corporaciones transnacionales e instituciones financieras. Asimismo, estos también fueron avalados en los eventos paralelos que se llevaron a cabo en París, los cuales anunciaron planes y financiamiento de falsas soluciones para la crisis climática. El objetivo: transformar los problemas en oportunidades para el sector privado, como es el caso con el mecanismo [REDD+](#) y nuevos planes "ambiciosos" de "reforestación", anunciados antes y durante la Conferencia en París.

Para garantizar sus intereses, las grandes corporaciones e instituciones financieras tienen a los gobiernos como verdaderos defensores de sus derechos. Nada diferente de lo que ya sucede, y de manera bien explícita, en las negociaciones internacionales de acuerdos de libre comercio. Las grandes empresas de petróleo, por ejemplo, deben de haber quedado muy satisfechas con el Acuerdo de París, ya que consiguieron afirmar su derecho a seguir contribuyendo de forma impune a la crisis climática. Sin haber citado ni una sola vez las palabras "combustibles fósiles", los gobiernos garantizaron el derecho de esas empresas y sus accionistas a extraer y lucrar con petróleo, gas y carbón mineral por más tiempo.

No incorporar de forma vinculante en el Acuerdo de París la contribución y responsabilidad histórica y diferenciada de los países industrializados que más han emitido dióxido de carbono (CO₂) es otro elemento que de forma implícita reconoce los derechos (de contaminación y explotación de combustibles fósiles) de esos países. Pero, sobre todo, dicha omisión reconoce los derechos de las grandes empresas a seguir promoviendo y lucrando con un modelo de producción y consumo destructivo, mientras los impactos negativos recaen sobre millones de personas, sobre todo en los países del Sur Global.

Sin embargo, la actuación de las grandes corporaciones e instituciones financieras no se reduce a ejercer influencia en la conferencia oficial y el Acuerdo. El mecanismo REDD+, por ejemplo, a pesar de tener algunas referencias en el texto oficial del Acuerdo, se destacó más en eventos y anuncios paralelos patrocinados por los gobiernos del Norte. El interés de estos gobiernos es "compensar" sus emisiones, mientras que los gobiernos del Sur están interesados en la financiación ofrecida. Durante los primeros días de la Conferencia, los gobiernos de Alemania, Noruega y del Reino Unido, así como el Banco Mundial, anunciaron inversiones de miles de millones de dólares en esta

falsa solución a la crisis climática. Además, Brasil y la Unión Europea en conjunto, introdujeron dentro del Acuerdo de París los lineamientos generales de cómo podría funcionar un futuro mercado en créditos de carbono de proyectos REDD+. (1)

En un evento paralelo llamado “Fórum Global del Paisaje” [*Global Landscape Forum*], organizado por el instituto internacional de investigación forestal CIFOR, se lanzó el llamado “AFR100”, un Plan para “recuperar” 100 millones de hectáreas de bosques llamados “degradados” o áreas totalmente deforestadas en África, prometiendo generar trabajo y mejorar el bienestar de la población (2). Diez países de ese continente ya se comprometieron a “recuperar” más de 30 millones de hectáreas de tierras. El Banco Mundial financiaría mil millones de dólares y otros U\$S 540 millones vendrían de inversores especializados en negocios “verdes” de países de América del Norte y de Europa.

Sin dudas es importante reforestar áreas afectadas por actividades destructivas, pero es fundamental discutir cómo y en beneficio de quién se hace esto. Existen serias dudas sobre la sinceridad de instituciones financieras como el Banco Mundial, así como de los fondos de inversiones “verdes”, siempre atentos a las oportunidades que puedan surgir en el “capitalismo verde”, cuya lógica es poner las ganancias por encima del bienestar de las comunidades locales.

El Banco Mundial tiene en su currículum la co-responsabilidad del fracasado Plan de Acción para los Bosques Tropicales [*Tropical Forestry Action Plan*] (TFAP), lanzado en los años 80 y que también estaba orientado hacia la "reforestación". El TFAP generó revueltas en comunidades de países como la India, donde, bajo el lema de "reforestación", promovió plantaciones de monocultivo de árboles en beneficio del sector privado, destruyendo todavía más los bosques. En la actualidad, el Banco Mundial continúa siendo uno de los principales promotores de la expansión de los monocultivos de árboles para la producción de celulosa y otros fines a través de su brazo privado, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés). Al mismo tiempo, el Banco es uno de los principales promotores de REDD+. Por ejemplo, en Mozambique, la IFC financia a la empresa portuguesa Portucel, que está tomando tierras cultivables de comunidades campesinas para plantar árboles de eucalipto, atentando contra la soberanía alimentaria de las poblaciones.

La participación de inversionistas “verdes” en el Plan “AFR100” también genera serias dudas, debido a que estos ya están muy activos en África con actividades llamadas de “reforestación”, que promueven plantaciones de monocultivos de árboles, y poniendo el ojo en negocios como el comercio de créditos de carbono y madera. Una de las principales empresas que invierte en plantaciones para créditos de carbono es la Noruega *Green Resources*, que en Uganda ya fue denunciada por haber destruido los medios de sustento de las comunidades locales con su “reforestación” para almacenar carbono. (3)

El Plan AFR100 en África es similar a otro plan lanzado en julio de 2015 por Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, uno de los principales países en el mundo en términos de bosques tropicales. En una visita oficial a los Estados Unidos, la presidenta anunció la “recuperación” de nada menos que 12 millones de hectáreas de bosques. Aquí también cabe la desconfianza, ya que se trata del país con la mayor superficie de plantaciones de monocultivo de eucalipto para producción de celulosa de exportación en los países del

Sur Global, con participación de corporaciones transnacionales como la sueca finlandesa Stora Enso y, de forma creciente, de fondos de inversión que se convierten en propietarios de tierras. Esas plantaciones son erróneamente llamadas de “bosques plantados” por el gobierno, por lo tanto, son elegibles dentro del plan de “reforestación” del gobierno. El sector de plantaciones de monocultivo de árboles es un sector estratégico para la economía brasilera y el gobierno busca de forma incesante promover su expansión, incluso con árboles genéticamente manipulados.

En los artículos de este boletín, resaltamos la forma en que las políticas que surgen de las negociaciones sobre el clima implican, de hecho, violaciones de derechos. Uno de los artículos reflexiona sobre la relación entre REDD+ y derechos humanos, enfocándose en la fragilidad de la aplicación del principio de Consentimiento Previo, Libre e Informado en la República Democrática del Congo. Hay otro artículo que viene de Tailandia y aborda el tema de las luchas populares contra las hidroeléctricas y sus graves impactos, dejando en evidencia la falacia de promoverlas como una fuente de energía limpia. Finalmente, este boletín incluye artículos sobre la lucha de dos pueblos indígenas; la del pueblo Bribri en Costa Rica contra un proyecto REDD+ en su territorio, y la del pueblo Pataxó, en Brasil, contra las plantaciones de eucaliptos de Stora Ensa y Fibria en su territorio. Finalmente, la Red Ambiental Indígena (IEN) analiza los efectos sobre los pueblos indígenas del Norte de las actividades extractivas realizadas por empresas que compran créditos de carbono de proyectos en el Sur. ¡Buena Lectura!

- (1) <http://www.redd-monitor.org/2015/12/15/cop21-paris-redd-and-carbon-markets/>
- (2) <http://www.wri.org/news/2015/12/release-african-countries-launch-afr100-restore-100-million-hectares-land>
- (3) <http://www.redd-monitor.org/2015/11/27/the-swedish-energy-agency-has-frozen-carbon-credits-purchases-from-norwegian-plantation-firm-green-resources/>

EL ACUERDO DE PARIS: AGRAVANDO LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS Y TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS

Bribris: un pueblo nunca conquistado que le planta cara a REDD

Ciclos continuos de rebeliones y resistencia han sido parte de la historia de un pueblo que vive en el Caribe Sur costarricense. Cada 50 años se registran diversas acciones que han librado al pueblo Bribri de perder eso que los define como tales; la tierra. Quemadas de iglesias, resistencia contra el monocultivo del banano, luchas contra las represas, las empresas petroleras y mineras han tejido la historia de este pueblo. En esta ocasión su adversario no es muy distinto a los anteriores y por eso le han plantado cara.

Costa Rica es uno de los países que en las conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático se presenta con el discurso de la “Economía Verde” y se proyecta como una plataforma de experimentación de los múltiples mecanismos que promueven la mercantilización de la naturaleza que se fomentan en la ONU. REDD+ es uno de estos mecanismos. Pero en el plano nacional se manifiestan contradicciones y oposición desde los pueblos indígenas a la imposición de REDD+ en sus territorios. Por su parte, el gobierno no ha respetado el derecho a la autodeterminación de los territorios indígenas.

Muestra de ello fue que el pasado 15 de octubre de 2015 se hicieron presentes en San José, capital costarricense, más de 250 personas integrantes de los 24 territorios indígenas, con el fin de ser atendidos por el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. A lo unísono, los pueblos Bribris, Terrabas, Ngobes y Cabecares manifestaron su rechazo a que REDD+ se aplique en sus territorios, o en cualquier parte del país.

Esta movilización no fue la primera. Ya son más de 5 años realizando talleres, reuniones, encuentros y conferencias de prensa en los que el pueblo Bribri ha señalado concretamente los impactos de varios proyectos mercantilizadores de la naturaleza, entre ellos la estrategia REDD, que desde 2008 los sucesivos gobiernos han querido imponer. Su principal reclamo cuestiona la legitimidad de estos proyectos dictados desde las instancias internacionales, que entran en directa confrontación con los usos y costumbres regidos por su cosmovisión, sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado y el respeto hacia la naturaleza.

Según las historias de este pueblo, el bosque es sagrado, donde Sibù (principal ente espiritual Bribri) creó el universo y con este al maíz, origen del pueblo Bribri. Su centro es el Cerro Namaso, un sitio sagrado y de gran importancia, junto con la totalidad del bosque, que cubre gran parte de su territorio indígena. En el Ùsure (casa cónica tradicional) se encuentra representado este universo: el cielo, las estrellas, la superficie de la tierra y el subsuelo. Todo ello, creación de Sibù, donde los Bribris son los encargados de su resguardo.

Para su cultura así como para otros pueblos indígenas en el mundo, los bosques son de suma importancia; todo dentro de él se considera sagrado y por lo tanto se respeta y se cuida. Se caza solo lo necesario para subsistir y con métodos tradicionales. Se usa del bosque solo lo necesario y no existe una visión de comercialización, no se envenena la tierra, el aire, ni el agua.

Por otro lado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por Costa Rica, señala que se deben realizar consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas capaces de afectar directamente a dichos pueblos. Estas consultas deben ser hechas de manera informada, previa y libre y a través de procedimientos apropiados y de buena fe. Esto es igualmente respaldado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El proceso del desarrollo de la estrategia de REDD en Costa Rica se inició a finales del 2008 bajo el apoyo del Fondo Cooperativo de Carbono para los Bosques (FCPF, por su sigla en inglés) del Banco Mundial y desde sus inicios ha pasado por alto los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional.

Haciendo un recuento se comprende la historia de imposición:

- En el 2009, la estrategia REDD+ se construyó en complicidad con supuestos representantes de los pueblos indígenas que no habían sido escogidos por elección popular, ni por sus usos y costumbres. Estos representantes impuestos nunca informaron a sus comunidades lo que se estaba negociando.

- En el 2012, se elaboró un plan de consulta indígena con supuestos líderes indígenas designados por el mismo gobierno nacional y no por el pueblo indígena.
- En el 2013, se definió por medio de Decreto Ejecutivo un comité directivo de REDD+ y una secretaría ejecutiva de REDD+. Esta última cuenta con un solo miembro indígena que representa a todos los pueblos indígenas del país (8 en su totalidad, distribuidos en 24 territorios). Nuevamente, sin haber existido una amplia participación para este nombramiento.
- En setiembre del 2015, el gobierno presenta el programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) Indígena en el marco de la “pre-consulta”. Este es considerado al mismo tiempo como un proceso de preparación hacia REDD+. Y de nuevo se repite la historia: se elaboró sin que los pueblos tengan conocimiento de dónde surgió, quiénes participaron y cómo se construyeron esos acuerdos.

El organismo que se encarga de implementar la estrategia REDD a nivel nacional es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), que tiene previsto hacerlo entre los años 2016 y 2020. Se prevé un proceso de consulta a pueblos indígenas que tendría que haberse realizado con anterioridad al proceso actual de implementación. En consecuencia hay un gran vacío de información. Múltiples preguntas surgen desde las comunidades; cómo y para qué nace; cómo funciona; cuáles serían los beneficios y sus consecuencias.

Desde hace más de 530 años se repite la misma historia de dominación. Intentando borrarles su idioma, tan importante para mantener la cultura; imponiendo sistemas de educación que no son propios; imponiendo gobiernos ajenos a sus autoridades tradicionales; así como leyes que poco o nada tienen que ver con sus formas de gobierno. Es así como se ven brotar megaproyectos que destruyen el bosque y contaminan los ríos: se construyen carreteras o tendidos eléctricos que atraviesan los territorios indígenas, invadiendo continuamente sus tierras para luego ser despojados de ellas. REDD no es diferente a cualquier instrumento de colonización, pero sí representa una vuelta de tuerca más del capitalismo.

REDD+, tal y como está concebido, prohíbe el uso de los bosques, y por ende, todos los demás “recursos” existentes. Eso lo saben quienes marcharon el pasado 15 de octubre ante la Casa Presidencial: “REDD irrespeta nuestra cosmovisión al ponerle precio y mercantilizar nuestros bosques, nuestros sitios sagrados, ríos y todos los seres que habitan en ellos... Exigimos que se respete nuestra forma de cuidado, que va más allá de proyectos inventados desde afuera, que terminan dividiendo nuestros tejidos comunitarios ancestrales que han permitido que las montañas estén tal cual hoy en día. Los pueblos decimos: No podemos vender el aire, el agua, el oro, la montaña... si le quitamos la sangre al bosque, se muere”. (1)

A pesar de las demandas de los pueblos indígenas para que se detenga el avance de la implementación de la estrategia REDD, la respuesta sorda del Gobierno en la reunión en Casa Presidencial fue “REDD va, porque va”. En este sentido los indígenas han manifestado que se debe de abrir un proceso verdadero de diálogo, en el cual se brinde información completa y transparente a toda la población de los territorios sobre el

objetivo de la misma y se priorice una agenda indígena que busca la autonomía sobre la tierra, la alimentación y la cultura”.

Esa misma tarde del 15 de octubre, estos pueblos indígenas reafirmaron su convicción de seguir construyendo autonomía, sin pedir permiso para existir. Esa es una de las formas de cuidar el bosque, su comunidad, y de caminar hacia una verdadera soberanía territorial.

Mariana Porras, mariana@coecoceiba.org
Henry Picado, henry@redbiodiversidadcr.info

(1) Manifiesto entregado en Casa Presidencial en contra de REDD. Octubre, 2015

De la pérdida de peces al cambio climático: una mirada al reciente movimiento anti-represas de la región del Mekong

“Las represas construidas en el curso principal del Mekong y en otros ríos de la región han provocado serios cambios en los ecosistemas del Mekong, poniendo en riesgo la vida, los medios de sustento y la economía de toda la región. Los pueblos indígenas, las mujeres y los niños son los más afectados por estos cambios. Las represas también han agravado los impactos del cambio climático que ya estamos enfrentando”.

“Hemos presenciado y sufrido en carne propia la destrucción causada por las represas. Para nosotros, que vivimos junto al río y experimentamos cada uno de los cambios en los sistemas de agua, no hay duda de que este tipo de represas trae consigo impactos muy negativos para las generaciones presentes y futuras; por tanto, no deben construirse.”

“Gobiernos del Mekong: ¡escuchen al pueblo!”

Declaración de poblaciones locales sobre las represas de la región del Mekong,
25 de septiembre de 2015

Esta declaración, redactada por representantes de las comunidades locales de Camboya, Tailandia y Vietnam, contó con la adhesión de más de 8.200 personas, principalmente de las comunidades que viven a lo largo del río Mekong, del lago Tonle Sap [Gran Lago] en Camboya y del delta del Mekong en Vietnam.

La declaración fue leída públicamente el 11 de noviembre de 2015, durante el Foro Público regional denominado “Las voces de los pueblos locales del Mekong: mensaje a los gobiernos del Mekong sobre la represa del Mekong”, realizado en la Universidad An Giang del Delta del Mekong, Vietnam. El Foro fue organizado por representantes de las comunidades locales de los tres países y ONGs aliadas. En la parte final del foro, la señora Huynh Thi Kim Duyen, representante de la Provincia Ga Mau del delta del Mekong, en Vietnam, se puso de pie para pronunciar su declaración final: “*Las poblaciones locales vietnamitas desean pedir que se suspenda la represa Don Sahong*”. Una declaración pública de ese tipo, pronunciada a viva voz y solicitando que se suspenda la construcción de la represa fue algo realmente nuevo en Vietnam. Igualmente activo en el Foro fue el representante del lago Tonle Sap, en Camboya. Sam

At, un pescador del lago Tonle Sap, fue claro al opinar: *“La pesca en Camboya se verá severamente afectada por las represas del Mekong, especialmente la represa Don Sahong. Queremos saber por qué se sigue impulsando la represa Don Sahong así como otras represas, y por qué ninguno de los gobiernos nos escucha”*.

En los casi treinta años de campaña contra las represas con la sociedad civil y la población local del Mekong, uno de los mayores obstáculos que ha impedido la participación de muchas ONGs y, en especial, de las comunidades locales del Mekong, ha sido la paralizante relación política entre el pueblo y su propio gobierno. La falta de democracia dentro de los sistemas socialistas de Vietnam y de Laos siempre ha afectado el margen de influencia de la población local y de las organizaciones de la sociedad civil en los asuntos de planificación energética y represas hidroeléctricas. Tailandia y Camboya, por su parte, con ámbitos más democráticos en principio pero con gobiernos de poder centralizados que favorecen al mundo empresarial, han obtenido resultados muy similares: falta de acceso a la información e incluso riesgo de vida para la población local y los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que forman parte del movimiento.

A pesar de todo eso, la situación actual en relación a las represas hidroeléctricas ha fortalecido al movimiento popular, que ha superado los obstáculos puestos tanto por los gobiernos del Mekong como por otros grupos influyentes de la región. Ahora las poblaciones locales cuestionan los obstáculos políticos y piden que haya un diálogo directo entre los gobiernos y el pueblo del Mekong. Quieren hablar de los intolerables impactos de los proyectos hidroeléctricos que han debido sufrir desde que China comenzó a construir la primera represa Manwan, en la parte superior de la corriente principal del Mekong, en 1986. La cronología de los impactos de las represas hidroeléctricas en la cuenca del río Mekong continúa con la represa Pak Mun, que fue construida en el mayor afluente del Mekong en Tailandia y se terminó en 1994. En 1997, Vietnam construyó la represa Yali Falls en la parte superior del Río Sesan, el río principal de la cuenca del Mekong. Por último, desde 2012, después de que China terminara cinco represas en la parte superior del Mekong, el gobierno de Laos comenzó a construir una serie de represas en la corriente principal inferior del Mekong, empezando por la represa Xayaburi. Actualmente Laos sigue impulsando la construcción de la represa Don Sahong, sin escuchar las expresiones de preocupación de toda la región.

Las voces más fuertes en la región del Mekong son las de las comunidades locales, que son quienes se enfrentan a los problemas directamente. En Camboya, cada vez más personas y comunidades sufren la drástica pérdida de peces en la corriente principal del Mekong, los afluentes del Mekong y todo el Gran Lago. Los estudios publicados por la Comisión del Río Mekong y el experto en peces desde 2011 señalaron que *“si para 2030 se construyen once represas en la cuenca baja de la corriente principal del Mekong, la pérdida total de peces prevista ascendería a 550.000 y hasta 880.000 toneladas, en comparación con el año de referencia 2000 (una disminución de entre 26 y 42 por ciento). Esto representa una pérdida de aproximadamente 340.000 toneladas si se lo compara con una situación en 2030 sin represas en el curso principal del río Mekong. Las estimaciones del costo de la pérdida de producción pesquera oscila entre 200 millones y 476 millones de dólares al año”*. La merma creciente de peces la sufre no sólo la “nación de los peces”, Camboya, sino también las comunidades pesqueras de

toda la región, entre ellas numerosas comunidades indígenas cuyo sustento depende casi totalmente de la pesca.

Junto con la pesca perdida, el hecho de que las represas en la región del Mekong hayan empeorado los efectos del cambio climático, especialmente en Vietnam, se ha convertido en una de las principales razones para que la población local de Vietnam reclame mayor participación en lo referente a la construcción de represas hidroeléctricas. La falta del agua dulce que aporta el río Mekong al delta, así como la falta de buenos sedimentos para la agricultura, afecta un área donde se cultiva el 70 por ciento de los productos agrícolas de Vietnam. El 78 por ciento de los 40.000 kilómetros cuadrados de tierra del delta del río Mekong se destina a la producción de arroz, y la mayor parte se encuentra apenas a poco más de dos metros sobre el nivel del mar. Que esta tierra corra el riesgo de quedar sepultada por el mar como consecuencia del cambio climático, exacerbado por las represas hidroeléctricas aguas arriba, obviamente se ha convertido en una preocupación para un millón de personas en el país, a las que también les preocupa la falta de agua para consumo diario.

Más allá de las limitaciones en el espacio político y de la propaganda que los impulsores de las represas hidroeléctricas continúan presentando a los gobiernos del Mekong, están los verdaderos impactos y el sufrimiento real del pueblo del Mekong. Los impactos actuales y previsibles de las represas hidroeléctricas a gran escala en la región del Mekong son muy evidentes. Por tanto, es imposible convencer a la población local de que la energía hidroeléctrica a gran escala es una fuente de energía “limpia”. Del mismo modo, la población local no puede tomar en serio la propaganda que muestra a las represas a gran escala de la cuenca del Mekong como “sostenibles”, teniendo en cuenta los graves impactos que las represas existentes les han traído a sus vidas y economías a nivel local, nacional y regional. Lo único que vale la pena anhelar es de hecho lo que los pueblos del Mekong manifiestan en su reciente declaración: *“Es hora de que nuestros gobiernos escuchen nuestras voces y respeten nuestro derecho a tomar una decisión sobre el futuro de nuestros ríos y nuestras vidas”*.

Premrudee Daoroung, premrudee@sevanasea.org
Proyecto SEVANA South-East Asia

Las compensaciones y el comercio de carbono: una lógica que viola los derechos indígenas y los derechos humanos

Para la mayoría de las personas en el Norte Global, los detalles del acuerdo sobre el clima de las Naciones Unidas, firmado recientemente en París el pasado mes de diciembre, no obtuvieron mucha atención, a excepción de pocas menciones en las noticias nacionales o a través de las redes de comunicación social. Quienes han estado prestando atención y tratando de destacar las incongruencias de los detalles del Acuerdo de París, así como la larga historia de estas negociaciones que comenzaron con el Protocolo de Kioto, son en gran parte las comunidades indígenas y las directamente afectadas: aquellas que están rodeadas de perforaciones de petróleo y gas, acosadas por el transporte y la fabricación de productos químicos letales y productos derivados del petróleo, o por la agricultura industrial de monocultivos.

“Frente a la crisis climática, los Pueblos Indígenas están directamente aquejados tanto por los impactos del cambio climático, como por las batallas para mantener los combustibles fósiles bajo tierra. El Acuerdo de París, tal como está, socava la soberanía de los Pueblos Indígenas en todo el mundo e impulsa falsas soluciones a la crisis climática”.

Red Ambiental Indígena (1)

El contenido del acuerdo de París se basa, en realidad, en un modelo puramente capitalista que elimina los derechos indígenas y los derechos humanos. Esta flagrante omisión, parece cumplir con el objetivo de absolver preventivamente cualquier violación que pudiera ocurrir cuando las empresas y los gobiernos profundizan sus actividades de extracción, así como cuando convierten tierras indígenas y tierras tradicionales en sumideros y compensaciones de carbono - un peligroso sistema que permite “compensar” las emisiones originadas en el Norte Global con proyectos en el Sur Global. Estos proyectos, entre otras cosas, mercantilizan los bosques.

Cada vez aumenta más la gravedad de las inundaciones, las sequías y las enfermedades transmitidas por plagas y animales, limitando los recursos disponibles para la subsistencia y amenazando la seguridad alimentaria. En el Norte Global, pueblos enteros a lo largo de las regiones costeras están perdiendo masa territorial ante el aumento del nivel de los océanos - tierras que han habitado durante incontables generaciones y que guardan un gran significado cultural y espiritual. Dicha pérdida pone en duda la futura supervivencia de estos pueblos como raza única y singular.

“Desde 1932, el sur de Louisiana [Estados Unidos] ha perdido más de 1.900 millas cuadradas (3.058 kilómetros cuadrados). Dicen que cada hora se pierde un acre de nuestras costas. Estamos experimentando tormentas tropicales y huracanes más violentos y frecuentes, y oleadas más elevadas. El huracán Katrina no fue el primero y hemos tenido varias tormentas desde entonces - y sabemos que vendrán más... Los niveles del mar están subiendo y las más de 10.000 millas [17.000+ km] de canales de petróleo y gas excavados por la industria para la extracción de recursos naturales, han dejado a nuestros humedales en un estado de pérdida irreparable. El agua dulce ya no fluye regularmente en nuestro territorio, y en cambio, el agua salada quema nuestras costas, matando la biodiversidad y obligando a las comunidades costeras a emigrar hacia tierras más altas. Dicen que las comunidades habrán de ser sacrificadas y las que están en el final del camino, donde los Houma alguna vez encontraron refugio, está convirtiéndose ahora en mar abierto”.

Monique M Verdin, París 2015, de la nación indígena Houma, Louisiana (2)

Otra omisión flagrante en el acuerdo de París es algún mandato para reducir la extracción de combustibles fósiles. Por el contrario, los esquemas de la “economía verde”, como los programas REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques) del Banco Mundial y las Naciones Unidas, proporcionarán los mecanismos financieros para que los países industrializados justifiquen la expansión de los regímenes de combustibles fósiles.

Las comunidades indígenas y aquéllas que están donde se concentran la industria y la extracción de combustibles fósiles, se ven amenazadas por la contaminación que continúa invadiendo el aire que respiran y el agua que beben. Las polémicas arenas

bituminosas de Canadá, un proyecto de extracción masiva de petróleo en el norte de Alberta; la perforación en alta mar en la plataforma continental exterior de Alaska o la fractura hidráulica en Dakota del Norte, son sólo algunos ejemplos que afectan de manera desproporcionada a los Pueblos Indígenas del Norte.

“Como pueblo Denedeh del Norte y del Ártico, ya hemos experimentado un cambio de 2 grados e impactos reales del cambio climático. También estamos aguas abajo del mayor proyecto industrial del planeta, las Arenas Bituminosas de Alberta, que están agravando los impactos del cambio climático a través de la contaminación y la degradación de las tierras de las que dependemos. Necesitamos más que compromisos escritos o verbales, necesitamos una acción real sobre el clima ahora y eso significa que no podemos expandir las arenas bituminosas y que debemos mantener los combustibles fósiles bajo tierra”.

Daniel T'Sealie, miembro de la comunidad Dene (3)

Además de eso, con esta omisión, el acuerdo de París continuará privatizando y vendiendo las tierras de los pueblos indígenas en el Sur Global con el expreso propósito de ocultar o enmascarar la contaminación en su origen. Para los bosques tropicales, REDD+ significa que las economías más poderosas del mundo pronto comenzarán a generar importantes incentivos en los inflados e inestables mercados financieros mundiales, tratando de atraer más “inversiones” a tierras de bosques.

La Ley AB32 - Soluciones al Calentamiento Global (4) y REDD+ - del estado de California, Estados Unidos, ofrece mecanismos que destinan grandes extensiones de bosques para sumideros o compensaciones de carbono, con escaso o ningún Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), conforme lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así, comunidades enteras en el Sur y el Norte son susceptibles a perder sus derechos de tenencia de la tierra, y en muchos casos son desalojadas de sus hogares por acciones militares o policiales. (5)

Los Pueblos Indígenas han sobrevivido durante milenios al adherirse a las Leyes Naturales, que son verdades o principios integrales e inmutables inherentes al mundo natural. Estos principios determinan cómo se utilizan y protegen los recursos, con el fin de mantener las cualidades regenerativas de la biodiversidad y asegurar que todos los elementos de la vida en este mundo sean capaces de coexistir y prosperar. Los pueblos de los bosques entienden que esta biodiversidad debe ser respetada y cuidada porque los bosques son también los pulmones de la Madre Tierra.

Los Pueblos Indígenas somos pueblos de la tierra y de las aguas; y nos enfrentamos a muchos retos, retos tales como los cambios extremos del clima, los fenómenos meteorológicos extremos, el desarrollo extremo de energía y el impulso incesante de la globalización económica y la continuidad de las formas occidentales de desarrollo. La explotación de los combustibles fósiles dentro de los territorios, los suelos, el agua y los mares de los Pueblos Indígenas está en aumento. Es el mismo negocio de siempre. Las industrias petroleras y extractivas, con la ayuda de los gobiernos, expanden la exploración para encontrar más combustibles fósiles y profundizar su adicción a la energía y a los altos niveles de consumo.

Casey Camp-Horinek, Ponca, Oklahoma, EE.UU. (6)

La financiación, en todo caso, debería provenir de sanciones que deberían pagarse en el origen del problema, y no de un mercado del que se benefician unos pocos. Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales de base deberían estar libres de carreteras, plantaciones de monocultivos, minería y extracción de combustibles fósiles, y de otras formas de megaproyectos.

“La transformación sobre cómo protegemos las tierras y los territorios en los que vivimos, jugamos y amamos, será influyente sólo si reconocemos de dónde debe provenir el cambio, de manera que se ponga fin a la violencia ambiental y a proyectos que profanan la tierra. Ese cambio vendrá de los protectores originarios de la tierra a través del encuentro de soluciones para las comunidades que pongan fin a la codicia, la corrupción y el pensamiento colonial. Vendrá de las prácticas en la tierra, que son la única manera en que podamos tener una relación con la tierra. Vendrá de escuchar las palabras que nos dicen los ancianos, de nunca más olvidar nuestras funciones genuinas, y de nunca más romper la sacralidad y las oraciones de las generaciones anteriores. Debemos ser fieles a las palabras de los que nos precedieron, y, nuevamente, no esperar que las reuniones coloniales ofrezcan soluciones a los Indígenas”.

Andrea Landry, Primera Nación Pays Plat, Canadá (7)

BJ McManama, bjmcmanama@gmail.com

Indigenous Environmental Network, <http://www.ienearth.org/>

(1) La Red Indígena Ambiental (*Indigenous Environmental Network*) es una alianza de pueblos indígenas de base cuya misión es proteger la sacralidad de la Madre Tierra, <http://www.ienearth.org/>

(2) “5000 miles from Grand Bois. Red Road to Paris”, Monique Michelle Verdin,

<http://indigenusrising.org/5000-miles-from-grand-bois-red-road-to-paris/>

(3) Comunicado de prensa de la red indígena *Indigenous Environmental Network*, diciembre de 2015,

<http://indigenusrising.org/indigenous-environmental-network-cop21-delegation-responds-to-announcement-of-canadas-support-of-1-5-climate-target/>

(4) Ley AB32 de Soluciones al calentamiento global, de California:

<http://www.arb.ca.gov/cc/ab32/ab32.htm>

(5) “Newest Scam on Fringe of Climate Change Involves Land-Grabs in Peruvian Rainforest”

<http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2012/03/08/newest-scam-fringe-climate-change-involves-land-grabs-peruvian-rainforest-101867>

(6) Presentación de la red *Indigenous Environmental Network* e *Indigenous Peoples of Mother Earth and our Grandmothers – and Future Generations*, <http://therightsofnature.org/casey-camp-horinek-opening-expert/>

(7) “COP21 Will Not Save our Lands and Territories”, Andrea Landry, <http://indigenusrising.org/cop21-will-not-save-our-lands-and-territories/>

Brasil: La empresa de monocultivos de eucaliptos Veracel Celulosa intenta expulsar a los indígenas Pataxó de su territorio

Los Pataxós de la aldea de Nueva Esperanza, municipio de Itamarajú, localizado en el extremo sur de la bahía del Estado de Bahía, están amenazados de expulsión. El área de 52.100 hectáreas que forma parte del territorio de Barra Velha, ha sido reconocida por el Estado brasileño como área que pertenece por derecho a los Pataxós. Pero el gobierno aún no ha expidido el decreto declaratorio, acto que resolvería la situación de violencia constante contra los habitantes de la aldea Nueva Esperanza y contra los cerca de 7 mil Pataxós que habitan ese territorio. Los Pataxós denuncian el retraso del gobierno así

como los impactos de Veracel Celulosa, propiedad de la transnacional sueco-finlandesa Stora Enso (50%) y de Fibria (50%). Los indígenas Pataxós luchan contra los intentos de expulsión de Veracel Celulosa, mientras intentan sobrevivir en apenas 20 hectáreas de tierras cercadas por los eucaliptos de Veracel.

Los colonizadores portugueses, impresionados por las bellezas naturales y por las abundantes potencialidades de una economía integrada colonial, iniciaron el proceso de conquista y colonización en esta región, hace mucho tiempo conocida como el extremo sur de Bahía. Los grandes bosques tropicales que se extendían por toda la región, con vastos manglares y "*mussurunga*", fueron el principal soporte de la actividad económica basada en la explotación de madera a lo largo de dos siglos, especialmente para la construcción naval y civil. El complejo paisaje geográfico, formado por la continuidad de una planicie con altos y exuberantes relieves que surgen por lo menos a 24 km del litoral, fue considerado un obstáculo para la expansión de la ocupación, por tener una altura que va de los 200 a los 900 metros sobre el nivel del mar, que servía de refugio para los indígenas que no estaban aliados. Hay relatos, como el del príncipe austríaco Maximiliano de Nied-Nieuwied, quien atravesó la región en 1816, que ilustran la belleza del paisaje, sus características y las estrategias de los indígenas para refugiarse en los abundantes bosques de la región, como los Pataxós (1).

Ese pueblo, como muchos otros en Brasil, sufre la expropiación desde la colonización. Un gran número de los Pataxós que viven en el extremo sur del estado de Bahía, se encuentran en la región de Monte Pascoal. Después de muchas luchas, consiguieron la demarcación de un territorio de 8.628 hectáreas, llamado Barra Velha de Monte Pascoal el 1 de setiembre de 1991, a través del decreto nº1.393. Pero los Pataxós que viven dentro y en el entorno de este territorio reivindican la revisión de los límites a 52.100 hectáreas. El Estado brasileño reconoció en 2008 que las 52.100 hectáreas han sido tradicionalmente ocupadas por los Pataxós y que ese territorio es fundamental para su supervivencia física y cultural. Alrededor de 24 mil de las 52.100 hectáreas de ese pueblo forman parte de una Unidad de Conservación, el parque Monte Pascoal. El reconocimiento se basa en la publicación del informe de delimitación que fundamenta los nuevos límites del territorio en el Diario Oficial de la Unión. A pesar de esto, el Ministerio de Justicia no expidió el decreto declaratorio, alegando la existencia de 6 mandatos de seguridad - acciones judiciales - de hacendados y gobiernos municipales en la región, como el Ayuntamiento Municipal de Porto Seguro y Prado, contrario a la demarcación. En consecuencia, la violencia continúa.

Además de los hacendados, la otra principal invasora del territorio indígena es la empresa de producción de celulosa de madera de eucalipto, Veracel Celulosa. En el caso de la aldea de Nueva Esperanza, el área retomada en marzo de 2013 por los Pataxó dentro del territorio ya delimitado de Barra Velha de 52.100 hectáreas, fue amenazada por la empresa Veracel Celulosa al presentarse ante la justicia para intentar expulsar a los Pataxó de esta área. El primer juez que trató el proceso (0002592-59.2013.4.01.3310), decidió mantener a los Pataxó en el área considerando la delimitación ya hecha por el Estado brasileño, optando por esperar hasta que el gobierno expidiera el decreto declaratorio. Pero un nuevo juez asumió recientemente el caso y amenaza rever la decisión del juez anterior y expulsar a las 35 familias Pataxós que viven allí, casi 160 personas de todas las edades.

Desde 2013, los Pataxó de Nueva Esperanza intentan sobrevivir en un área de apenas 20 hectáreas cercada por las plantaciones de eucaliptos de Veracel. En el lugar donde había eucaliptos, los Pataxó ahora plantan alimentos como mandioca y ananá, para el sustento de sus familias. Pero aún sufren diariamente los impactos de las plantaciones de eucalipto de Veracel. Afirman que viven situaciones extremas en relación al agua. Una sequía prolongada viene profundizando los impactos ya devastadores del monocultivo a gran escala del eucalipto. Muestran un lugar donde la cercanía de los eucaliptos a las nacientes de agua destruyó las mismas y forzó a los Pataxó a cavar un pozo de agua para garantizar mínimamente el abastecimiento de las familias.

Otro impacto grave es la aplicación de los agrotóxicos por Veracel. Denuncian que últimamente Veracel realiza aplicaciones de agrotóxicos con avionetas, aparentemente intentando combatir una oruga que ataca al monocultivo del eucalipto. Las aplicaciones aéreas afectan también a las familias Pataxó que viven prácticamente dentro de las plantaciones. Los habitantes reclaman que no fueron avisados sobre estas aplicaciones y no están al tanto de los productos aplicados. Lo que sí saben es que los productos ocasionaron diversas enfermedades, principalmente en los niños, como picazón y problemas respiratorios. Denuncian también que la empresa únicamente ha traído desgracia y que las promesas realizadas son un mito. Comparan a Veracel con Alvares Cabral, el primer portugués que llegó a Brasil e inició la era de la dominación colonial. Hacen la comparación porque dicen que Cabral tenía el mismo objetivo que Veracel tiene hoy: la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios.

El sueño de los Pataxó de Nueva Esperanza es tener una vida digna, lo que implica controlar el territorio para así poder vivir bien dentro de él, para ver a sus hijos y nietos nacer y vivir en paz. “La población está creciendo y nuestra área es pequeña para alimentar a los descendientes con dignidad y salud. No podemos soportar una nueva invasión para destruir nuestra tierra, nuestro pueblo”. Destaca uno de los líderes.

Veracel es una empresa certificada por el sello de certificación FSC (Consejo de Manejo Forestal). La empresa afirma en su página en internet que “conoce, respeta y contribuye a las causas indígenas” (2). La certificación FSC ya fue denunciada muchas veces, pero ni las quejas más graves contra Veracel lograron quitarle la certificación a la empresa (3), lo que demuestra que la FSC y sus miembros (empresas, ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil) son cómplices de la situación, ya que no toman ninguna medida a pesar de tantas denuncias a lo largo del tiempo.

Ivonete Gonçalves de Souza, ivonetecepedes@gmail.com, CEPEDES
Domingos Andrade, cimiextremosuldabahia@gmail.com, CIMI

(1) Cancela, F (2012), “Del proyecto a proceso colonial: ‘indios, colonos y autoridades regias en la colonización reformista de la antigua capitanía de Porto Seguro (1763-1808)”, Salvador, p. 36-38

(2) <http://www.veracel.com.br/relacionamento-com-a-comunidade/comunidades-indigenas/>

(3) <http://wrm.org.uy/es/?s=veracel>

ENFOQUE: REDD Y LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Proyecto de Bosques Tropicales en la Cuenca del Congo: las comunidades desconfían de la “Revolución Conservacionista”

El proyecto REDD Mai N’dombe de la República Democrática del Congo suele aparecer muy a menudo en los materiales que promocionan el [sistema REDD+](#). El proyecto, creado por una empresa canadiense y ahora dirigido por la organización californiana *Wildlife Works Carbon*, comercializa créditos de carbono a partir del argumento de que, de no ser por el proyecto, los bosques de la zona hubieran sido destruidos por la tala industrial. Los beneficios para las comunidades locales son una piedra angular en los materiales de promoción del proyecto. Se sabe que gran parte de las tierras de la zona está en manos de comunidades locales con tenencia consuetudinaria. Por tanto, surgen interrogantes en cuanto a si las comunidades de la zona consideran que el proyecto REDD sea tan beneficioso como lo describe el material propagandístico.

El proyecto REDD Mai N’dombe, a veces también llamado “Proyecto de Bosques Tropicales en la Cuenca del Congo”, se extiende a lo largo de aproximadamente 300.000 hectáreas de tierras de bosque, a varios cientos de kilómetros al noreste de la capital de la RDC, Kinshasa. El proyecto fue creado por la compañía canadiense *ERA - Ecosystem Restoration Associates Inc.* (se llama ERA desde que se incorporó a *Offsetters Climate Solutions*, que en 2015 se convirtió en *NatureBank Asset Management Inc.*). En 2011, ERA adquirió del gobierno de la RDC una concesión para conservación del bosque. Dos años más tarde, ERA vendió “ERA-Congo” - la empresa creada para gestionar el proyecto REDD en la RDC - a una empresa con sede en California llamada *Wildlife Works Carbon* (WWC), que también dirige el proyecto REDD+ Kasigau Corridor en Kenia ([ver más información](#)).

El proyecto REDD Mai N’dombe, de WWC, no debe confundirse con la propuesta del gobierno de la RDC de convertir la recién creada provincia Mai N’dombe - una superficie de 12,3 millones de hectáreas habitadas por alrededor de 1,8 millones de personas. La creación de esta provincia fue un proyecto piloto “REDD jurisdiccional”, en el marco del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (*Forest Carbon Partnership Facility*), del Banco Mundial. (1)

El modelo de negocio del proyecto REDD Mai N’dombe de WWC es la venta de créditos de carbono. Estos se generan en base a la elaboración de informes que muestran cómo las actividades del proyecto impidieron la deforestación. Esos informes luego son verificados por empresas auditoras, pagadas por el proyecto REDD (ver [“10 alertas sobre REDD para comunidades”](#), disponible también en lingala y swahili).

En 2011, ERA adujo que la “parte del proyecto referida a la Mejora de la Gestión del Bosque dará como resultado el cese de la actividad maderera con fines comerciales”. (2) En diciembre de 2012, la firma auditora *Det Norske Veritas* (DNV) aceptó el argumento de que sin la intervención de ERA hubiera sido inminente que se volvieran a otorgar dos concesiones madereras canceladas en 2008. Sin embargo, en 2011 todavía estaba vigente la moratoria impuesta por el gobierno de la RDC a la expedición de nuevas

licencias de explotación maderera, que se remonta a 2004. Esto plantea interrogantes sobre el argumento de ERA de que su intervención evitó el inminente otorgamiento de nuevas licencias de explotación forestal para la zona del proyecto. WWC señala una correspondencia mantenida con los ministros como prueba de que las dos concesiones madereras que fueron convertidas en concesiones para conservación del bosque, se hubieran vuelto a conceder de no haber sido por el proyecto REDD+. Sin embargo, desde 2011 no se han otorgado nuevas concesiones madereras en ningún lugar del país y, de haberlo hecho, se hubiera violado un decreto presidencial. La mayoría de los créditos de carbono por tanto se basan en la afirmación de que era inminente que se volvieran a otorgar concesiones para la explotación maderera y que se reiniciarán las actividades de tala comercial en 2011.

El proyecto REDD Mai N'dombe estima que las emisiones evitadas por el proyecto son de 1,5 a 3,0 millones de toneladas de CO₂ por año, a lo largo de los 30 años de duración del proyecto (a modo de comparación, las emisiones anuales de Dinamarca derivadas de la aviación internacional fueron de 2,5 millones de toneladas en 2013). Otro supuesto cuestionable. Un borrador del llamado “Documento del Programa para la Reducción de Emisiones” del gobierno de la RDC, que elaboró en diciembre de 2015 para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial, confirma que de 11 concesiones madereras industriales en la provincia Mai N'dombe, sólo dos están activas actualmente. Por otra parte, las cifras oficiales del gobierno no revelan que haya habido producción maderera en absoluto entre 2002 y 2006 en las dos concesiones madereras que hoy conforman la concesión de WWC para la conservación del bosque. La auditora DNV, ignorando este contexto, aprobó la conformidad con el Estándar Verificado de Carbono (VCS, por su sigla en inglés) y con el estándar de la Alianza del Clima, la Comunidad y la Biodiversidad (CCBA, por su sigla en inglés). DNV también confirmó que entre marzo de 2011 y octubre de 2012, el proyecto REDD Mai N'dombe había impedido la emisión de 2.548.715 toneladas de CO₂ - créditos de carbono que ahora pueden venderse con el sello de aprobación de VCS y de la CCBA.

El proyecto no solamente pasó la evaluación del estándar de la CCBA. Fue galardonado con la certificación de “nivel de oro” (“*Gold Level*”), que significa que el proyecto brinda más que los beneficios requeridos en cuanto a biodiversidad y adaptación al cambio climático - sin duda un “extra” para comercializar los 2,5 millones de créditos de carbono. Muchos compradores de créditos de compensación están conscientes de que su reputación puede correr riesgo con los créditos de REDD+ si llegaran a surgir conflictos entre el agente del proyecto REDD+ y las comunidades. Por lo tanto, para las empresas interesadas en los créditos de compensación REDD+, la certificación es considerada una garantía de calidad - una falsa expectativa si se tiene en cuenta que numerosos proyectos REDD+ certificados son conocidos por haber causado o exacerbado conflictos. (3)

Poco después de que el proyecto REDD Mai N'dombe recibiera la certificación de VCS y CCBA, sus dueños anunciaron la primera venta de créditos de carbono, en enero de 2013. La empresa alemana *Forest Carbon Group* adquirió 300.000 créditos de carbono del proyecto, con opción a comprar más. A su vez, *Forest Carbon Group* ofrece los créditos REDD a empresas y particulares que deseen compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Inicialmente, sus principales clientes eran empresas de energía regionales de Alemania, que utilizaban los créditos de carbono para ofrecer a sus clientes “gas natural con neutralidad climática”. (4) El proyecto aún se comercializa en

la página web de *Forest Carbon Group*, lo que indica que es posible que todavía no haya vendido todos los créditos que compró en 2013. Se desconoce cuánto dinero se ha recaudado hasta la fecha a través de la venta de créditos de carbono derivados del proyecto REDD Mai N'dombe; tampoco se sabe cuánto dinero recibieron las comunidades de la zona del proyecto. Sin embargo, un informe de 2015 de la organización IIED señala que, de acuerdo a la información del propietario del proyecto, los costos operacionales del proyecto ascienden a unos 2,5 millones de dólares por año. (5)

Desde 2015, el proyecto REDD Mai N'dombe también está ofreciendo créditos de carbono directamente a personas a través de la iniciativa “*Stand for Trees*” (levántate por los árboles), que es apoyada por la agencia estadounidense para el desarrollo USAID. La iniciativa tiene como objetivo aumentar las ventas de los créditos de carbono forestal luego que las compras por parte de las empresas no resultaron como se esperaba. En diciembre de 2015, el proyecto también trató de recaudar fondos a través de una plataforma de donación en línea, recibiendo US\$ 4.720 dólares de los 50.000 que esperaba. (6) Parece que los créditos de carbono del proyecto REDD Mai N'dombe que actualmente están a la venta siguen siendo parte de los créditos emitidos después de la auditoría de verificación de DNV, en diciembre de 2012. (2)

Los beneficios para las comunidades locales son el eje fundamental de la propaganda del proyecto REDD Mai N'dombe. “La comunidad local del bosque, 50.000 aldeanos congoleños, se benefician directamente del proyecto”, reza la primera frase de la descripción que se hace sobre los “Impactos del Proyecto” en la página web de *Wildlife Works Carbon*. (7) Seis de las 11 diapositivas que constituyen la presentación del proyecto subrayan los beneficios para las comunidades, y el comunicado de prensa conjunto de ERA y WWC, que anuncia la exitosa certificación de VCS y CCBA en 2012, afirma que “las comunidades locales recibirán beneficios directos del proyecto en forma de puestos de trabajo, escuelas, clínicas de atención médica, mayor seguridad alimentaria como resultado de una mejor agronomía y la renovación de reservas de peces nativos saludables, la creación de capacidades de las ONG locales y organizaciones de base comunitaria, todo financiado a través de un intercambio transparente y equitativo de los ingresos derivados del carbono”. (8) Al mismo tiempo, los documentos producidos para las empresas auditoras describen que la mayor amenaza a la conservación del bosque es su uso local por parte de las comunidades. En 2011, ERA escribió que la “reducción de la tala ilegal y la reducción del desmonte insostenible del bosque para agricultura y obtención de leña, se abordarán en la parte REDD+ del proyecto”. (9) El análisis de data de la cobertura forestal de la zona, realizado mediante el sistema de monitoreo *Global Forest Watch*, sugiere que la deforestación en el proyecto REDD en realidad se disparó en 2011. Se desconoce si eso fue el resultado de que la gente se apresuró a despejar la zona para producir sus alimentos, anticipando y temiendo las inminentes restricciones, o si fue por actividades de tala ilegal dentro de la concesión. Lo primero que hacen numerosos proyectos REDD+ es imponer restricciones al uso de los bosques antes de ofrecer e implementar opciones alternativas a los campesinos que dependen del bosque para cultivar los alimentos con los que se alimentan sus familias. La información recogida durante la visita del WRM a la zona de Mai N'dombe en 2014, señala que ocurre lo mismo con el proyecto REDD Mai N'dombe.

En noviembre de 2014, el Movimiento Mundial por los Bosques (WRM) visitó la zona por invitación de la organización nacional campesina *Confédération paysanne du Congo*, COPACO-PRP, miembro de La Vía Campesina. Las actividades conjuntas en la región llevó al WRM y COPACO-PRP pasar por varias aldeas a lo largo de una carretera que atraviesa la concesión del proyecto REDD+. Sin embargo, no fue posible entrevistar a los habitantes de algunas de esas aldeas a causa de que existía una gran tensión entre las comunidades en esta parte de la concesión para la conservación del bosque y el proyecto REDD+. A eso se sumó la hostilidad hacia el WRM por parte del personal y partidarios del proyecto, antes, durante y después de un taller sobre cambio climático y REDD+ realizado en la ciudad de Inongo (donde también se encuentra la oficina del proyecto *Wildlife Works*). Pero las conversaciones en Inongo y en la ciudad de Nioki, al sur de la concesión REDD, sugieren que los beneficios destacados en el material propagandístico del proyecto REDD Mai N'dombe quizás no sean tan evidentes para todos los integrantes de las comunidades. Parece muy probable que exista una fuerte oposición al proyecto en varias aldeas, sobre todo en la parte occidental y en el interior de la concesión. Casualmente, en uno de sus informes de auditoría, DNV señala que no visitaron esa parte de la concesión durante su evaluación, mencionando limitaciones en materia de tiempo. Nada indica que DNV haya intentado buscar información de organizaciones locales acerca de la percepción del proyecto REDD en la parte de la zona de concesión que no visitó en su auditoría de campo.

Los derechos adaptados a REDD+, en lugar de REDD+ adaptado a los derechos

Se han realizado numerosos talleres y se han escrito innumerables documentos sobre el tema del “Consentimiento Libre, Previo e Informado” (CLPI) con relación a REDD+. No obstante, la mayoría no mira en el meollo del asunto. Se ignora la cuestión de si REDD+, como mecanismo que vende créditos de carbono para justificar la destrucción en otro lugar, podría ser siquiera considerado como para tener el Consentimiento Libre, Previo e Informado de quienes ven sus formas de vida afectadas sustancialmente por la actividad del proyecto. A los pueblos que sufren la permanente destrucción de los territorios de los que dependen, como resultado de que una empresa compre créditos de carbono de un proyecto REDD+ en otro lugar, por ejemplo, nunca se les pregunta si consienten a la compensación de carbono.

Ni ERA ni WWC compraron la tierra que genera sus créditos de carbono REDD. Más bien, ERA persuadió al gobierno de la RDC para que otorgara una concesión para conservación del bosque en tierras que anteriormente habían sido parte de dos concesiones madereras industriales. Estas concesiones madereras habían sido canceladas, al igual que la mayoría de las otras concesiones para explotación industrial de la madera en la RDC, como parte de un proceso de la Comisión Interministerial en 2008, creado por el Banco Mundial para dictaminar en materia de la legalidad, o no, de unas 150 operaciones de tala industrial. (10) Como una iniciativa basada en una concesión, el proyecto REDD Mai N'dombe revela otro problema del debate sobre el CLPI en REDD+: la usual discrepancia entre cómo se aplica el CLPI en las iniciativas REDD+ y cómo se comunica la aplicación del CLPI en el material propagandístico de REDD+ .

A nuestro entender, las comunidades que habitan la zona del proyecto REDD no participaron de las negociaciones sobre el otorgamiento de la concesión para conservación del bosque a ERA, ahora en manos de WWC. Tampoco hay indicios de

que ERA hubiera consultado a las comunidades de la zona tratando de sondear sus opiniones con relación a su propuesta, antes de entrar en negociaciones con el gobierno. Recién después de que ERA y el gobierno de la RDC firmaron el Acuerdo de Derechos de Carbono y los contratos de concesión para la conservación del bosque, en marzo y agosto de 2011 respectivamente, y después de haber anunciado que buscarían la certificación del estándar CCBA, parecería que ERA entró en contacto con las comunidades. Cuando ERA llegó a las comunidades, ya se había adoptado la gran decisión - otorgar una concesión para la conservación del bosque que restringiría el uso de dicho bosque, el cual a su vez proporciona el sustento de una gran parte de la población local. Por lo tanto, todo indica que no se solicitó consentimiento alguno a las comunidades sobre esta decisión que constituye la base del proyecto REDD. Pero este hecho no está claramente indicado en el material de relaciones públicas que destaca los beneficios sociales y la participación de las comunidades en las actividades del proyecto.

En cambio, el Documento de Diseño del Proyecto REDD Mai N'dombe ofrece información ambigua. Una formulación en la página 70 sugiere que los representantes de la comunidad se pronunciaron en cuanto a la ejecución del proyecto REDD (“De conformidad con los requisitos del proceso del contrato de concesión, los líderes locales de la zona del proyecto dieron su consentimiento a ERA para ejecutar el proyecto REDD+”). Unas páginas más adelante, el documento aclara que, en realidad, a las comunidades sólo se les presentó la opción de participar o no en el proyecto: “Las partes interesadas pueden afectar el diseño del proyecto, expresar sus reclamaciones y dar o negar su consentimiento previo, libre e informado a la participación en las actividades del proyecto”. (11)

Estas formulaciones plantean más preguntas que respuestas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una comunidad optara por “no participar” en el proyecto y continuara utilizando el bosque como lo hizo siempre? ¿Se quitaría del inventario de carbono esa porción del bosque que forma parte de la concesión para conservación aunque también podría ser una zona de uso consuetudinario de la tierra? ¿Las comunidades podrían seguir utilizando el bosque como lo hacían antes? ¿Eso fue explicado como una opción que tenían las comunidades durante el proceso de consulta CLPI? Si no era una opción, ¿por qué no lo era? (12)

Estas preguntas parecen más relevantes cuando se tiene en cuenta que gran parte de las tierras de la zona está en manos de comunidades locales en régimen de tenencia consuetudinaria. Por lo tanto, las comunidades pueden no reconocer los límites de una concesión si ésta se superpone a sus tierras consuetudinarias. La ONG *Forest Peoples Programme*, con sede en el Reino Unido, estima que como mínimo entre un tercio y la mitad de la concesión de WWC para conservación se superpone a territorios consuetudinarios de las comunidades locales. La iniciativa *Mapping For Rights*, de la organización *Rainforest Foundation UK*, ha documentado incluso la tenencia consuetudinaria hasta las zonas que limitan y se superponen al límite occidental del proyecto REDD Mai N'dombe, de WWC. (13) Y hay indicios de conflicto en torno a los acuerdos con el proyecto REDD, aparentemente firmados sin el consentimiento pleno de las aldeas representadas (supuestamente) por los jefes tradicionales. En “*Redeeming REDD*”, Michael Brown señala que “En octubre de 2012, mensajes informando de conflictos en el sector Basengele de la zona de concesión para conservación circularon por correo electrónico [...]. Aparentemente el jefe tradicional de

Bongo recibió un disparo y su casa habría sido incendiada por considerar que había entregado tierras tradicionales a extranjeros sin el consentimiento de la comunidad”. (14) El incidente fue también mencionado en conversaciones mantenidas por integrantes del WRM que visitaron la zona en noviembre de 2014. La gente del lugar explicó que esa persona había sido uno de los tres jefes tradicionales que firmaron los acuerdos con el proyecto REDD. Esos tres jefes tradicionales lo eran a nivel de clan (*chefs de groupement*), no de la aldea (*chef de terre*). Aún así, los acuerdos que firmaron fueron citados por el proyecto REDD como prueba del consentimiento de la comunidad. En el suceso mencionado estuvieron involucradas comunidades del sector de la concesión para conservación que fue hostil a la visita realizada por el WRM en 2014. Una presentación de septiembre de 2015 sobre posibles modelos de distribución de beneficios en caso de que se aceptara la propuesta del gobierno de la RDC de un proyecto piloto de “REDD jurisdiccional” en el marco del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, del Banco Mundial, señala que ciertas comunidades (Basengele) no ribereñas y que dependen del bosque para su supervivencia, continúan recelosas ante el proyecto REDD+.

Los informes de auditoría de DNV para la certificación de la CCBA no mencionan nada de esta información, a pesar de que el estándar CCBA contiene una definición bastante larga del CLPI. En cambio, DNV decidió que el proyecto REDD Mai N'dombe cumple con los requisitos. El estándar CCBA define como “Previo” el consentimiento que se ha solicitado “con suficiente anticipación a cualquier autorización o comienzo de actividad”. ¿Acaso las comunidades tienen “la opción de negar el consentimiento” a la decisión principal que autoriza el proyecto REDD (otorgamiento de la concesión para conservación)? Si no se ofreció esa opción, con la justificación de que no se prevé un procedimiento de este tipo en la legislación de la RDC, por ejemplo - no debería haberse comunicado esto claramente, explicando cuáles eran las decisiones para las que se buscaba el consentimiento de la comunidad y en cuáles decisiones no se buscaba consentimiento?

La definición de CCBA sobre “informado” incluye, entre otros factores, que las comunidades cuyo consentimiento se busca deben estar provistas de “una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de precaución”. Es de suponer que dicha información incluye los documentos jurídicos y contratos, especialmente cuando ya existe un decreto ministerial (de mayo de 2011) que exige que dicha información se haga pública. Esto incluiría, por ejemplo, los documentos jurídicos que otorgan a ERA (y ahora a WWC) la concesión para la conservación del bosque Mai Ndombe. Las personas y representantes de las autoridades estatales con los cuales hablaron los integrantes del WRM que realizaron la visita en noviembre de 2014, no estaban al tanto de esos documentos. También señalaron que el “*Cahier de Charge*” - el documento que forma parte de los acuerdos legales y describe las obligaciones que tiene el titular de una concesión para con las comunidades que habitan la zona de la concesión - estaba disponible “en teoría”, pero no en la práctica. Una extensa búsqueda en línea, después de la visita de campo de 2014, no proporcionó indicio alguno de que estos documentos jurídicos y reglamentarios estuvieran en el dominio público o disponibles para las comunidades de la zona del proyecto REDD.

¿Otro proyecto REDD+ que promete mucho y cumple poco?

La construcción de 19 escuelas durante los 30 años de duración del proyecto es uno de los proclamados beneficios del proyecto para las comunidades. A mediados de 2015, a cinco años de iniciado el proyecto, se habían terminado dos escuelas y estaban en marcha los planes para construir otras dos. Ambas escuelas fueron construidas en comunidades cercanas a la orilla del lago, beneficiando a las comunidades que habitan a lo largo del lago y no a las comunidades del interior, una decisión del proyecto que tiene el potencial de exacerbar aún más la tensión entre las comunidades. En una conversación realizada en noviembre de 2014, algunos residentes de Inongo mencionaron que un barco que había sido utilizado para transportar a los dignatarios que participaron en la apertura de la primera escuela en Lukongo, a unos 30km de Inongo, se incendió poco después de que el grupo regresara a Inongo.

Otra promesa del proyecto REDD es transmitir a los aldeanos sistemas agrícolas más productivos, lo que incluye la introducción de cultivos de alto valor, como verduras y frijoles, y prestar apoyo en el acceso a los mercados para esos productos. Cuando el personal del WRM visitó la zona en 2014, se decía que sólo se había creado y funcionaba una huerta de demostración en la ciudad de Kesengele, junto al lago. Así lo confirma un informe de *Forest Peoples Programme*, publicado a finales de 2013. (15)

En la conversación surgió que la gente también cuestionaba la viabilidad económica de las actividades propuestas. Se habló de las dificultades que habían surgido en los ensayos anteriores de cultivo de frijoles, y que sólo en una pequeña parte de la concesión para conservación había suelos adecuados para dicho cultivo. Cuando se preguntó la opinión acerca de la propuesta de transportar frijoles y cebollas a los mercados de Kinshasa, en especial teniendo en cuenta el estado de la infraestructura (o más bien, la ausencia casi total de la misma), la respuesta fue sistemáticamente de consternación: “Actualmente transportamos cebollas de Bas Congo a Inongo, ¿por qué no trabajar mejor en los mercados locales?” “Con una distancia tan grande para transportar cualquier cosa a Kinshasa, y con el estado en que están las carreteras, ¿cómo podrían los vegetales producidos por el proyecto REDD competir con los frijoles o las cebollas cultivadas en Bas Congo? El acceso allí es mucho más fácil y está mucho más cerca de Kinshasa que Mai N’dombe”, fueron algunos de los comentarios.

Y, por supuesto, el proyecto REDD Mai N’dombe promete generar “empleos locales directos”. Aunque no queda claro cuántos serían. La información contenida en los documentos sobre el proyecto es contradictoria. La información de la página web “*Stand for Trees*” afirma que el proyecto “emplea directamente a más de 170 personas locales”, mientras que la diapositiva 11 de la descripción del proyecto en la página web de WWC afirma que el proyecto da empleo a sólo 60 personas. Y, por supuesto, las cifras por sí solas no dicen nada acerca de las condiciones de trabajo; si los contratos son temporales a corto plazo o si estas 170/60 personas están empleadas por WWC.

La conservación de los bosques tropicales en la Cuenca del Congo: ¿de qué revolución se habla?

En una iniciativa propagandística, el proyecto REDD Mai N’dombe es presentado como una “revolución para la conservación de los bosques tropicales en la Cuenca del Congo”. (6) Teniendo en cuenta las impresiones obtenidas durante la visita del WRM a la región, en noviembre 2014, así como la información recogida desde entonces, es

difícil pensar que haya una “revolución” de este tipo. Más bien, considerado desde el clásico punto de vista del impacto que tiene el proyecto sobre los derechos de las comunidades y sobre la justicia, lo que vemos es otro proyecto de REDD+ donde las historias presentadas en folletos brillantes y charlas en ferias internacionales de negocios y conferencias de la ONU, difieren notablemente de las realidades en la zona del proyecto. Curiosamente, y en evidente contraste con la mayoría de los proyectos REDD+ que hemos visitado en los últimos años, identificamos sólo una pancarta anunciando el proyecto REDD Mai N'dombe en las más de 7 horas de recorrido en automóvil por la carretera que atraviesa la concesión REDD+. ¿Quizás esos carteles sean más comunes a lo largo de la orilla del lago, donde tienen lugar la mayoría de las actividades de la comunidad vinculadas al proyecto REDD+?

En resumen, el proyecto REDD Mai N'dombe es otro firme candidato a una colección de conflictos, contradicciones y mentiras de REDD+.

Jutta Kill, jutta@wrm.org.uy

Integrante de la secretaría internacional del WRM

(1) FERN y FPP (2014): *Implement in haste, repent at leisure. A call for rethinking the World Bank's Carbon Fund, based on an analysis of the Democratic Republic of Congo Emissions Reduction - Project Idea Note (ER-PIN)*. <http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Implement%20in%20haste.pdf>

También disponible en francés: <http://www.fern.org/fr/publications/reports/mettre-en-oeuvre-dans%E2%80%99empressement-pour-le-regretter-longtemps>

(2) DNV (2012): *CCB Verification Report/ Verification Statement. ERA and WILDLIFE WORKS' Mai Ndombe REDD Project in the Democratic Republic of Congo. Verification Period: 14 marzo, 2011 a 31 octubre, 2012. REPORT NO. 2012-9749, 6 diciembre 2012. DNV Climate Change Services AS (DNV)*. www.vcsprojectdatabase.org/services/publicViewServices/downloadDocumentById/11067

Base de datos de VCS con información sobre la emisión de créditos:

http://www.vcsprojectdatabase.org/#/vcus/p_934

(3) Por más información, consultar el informe del WRM “REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras”, en <http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/redd-una-coleccion-de-conflictos-contradicciones-y-mentiras/>, y artículos regulares sobre conflictos asociados con proyectos REDD+ en la página web de REDD-Monitor, <http://www.redd-monitor.org>

(4) Certificado de “gas natural con neutralidad climática”, expedido por TÜV Rheinland para el proveedor de energía regional *Aschaffenburgerversorgung GmbH*. <http://www.stwab.de/Energie-Wasser/Oekogas/Rechte-Seite/TUEV-Zertifikat-Klimaneutrales-Erdgas-2014.pdf>

(5) Nhantumbo, I. y Camargo, M. (2015): *REDD+ for profit or for good? Natural Resource Issues*, No. 30. IIED, London.

(6) “*Conservation Revolution in the Congo Basin Rainforest!*”

<https://www.indiegogo.com/projects/conservation-revolution-to-save-congo-rainforest#/story>

(7) Página web de *Wildlife Works*, Proyecto REDD+ Mai Ndombe, RDC.

<http://www.wildlifeworks.com/shopcarbon/>, acceso del 08/01/2016

(8) *ERA Carbon Offsets Ltd. and Wildlife Works Carbon LLC Deliver First REDD+ Project in Democratic Republic of Congo*. 19 diciembre 2012.

(9) IRW-Press (2011): *ERA Announces Signing of a 17.5 Million Tonne Carbon Offset Agreement With the Democratic Republic of Congo*. 04.04.2011

(10) REDD-Monitor (2011): *Ecosystem Restoration Associates project in DR Congo: plenty of REDD-hot air?* <http://www.redd-monitor.org/2011/08/24/ecosystem-restoration-associates-project-in-dr-congo-plenty-of-redd-hot-air/>

(11) ERA y *Wildlife Works* (2012). *Mai Ndombe REDD+. A joint project of ERA and Wildlife Works. Project Design Document, Validated to the Climate, Community, and Biodiversity Standards* (2nd ed). Octubre 31, 2012. Page 72.

https://s3.amazonaws.com/CCBA/Projects/Mai_Ndombe_REDD_Project/Mai+Ndombe+Final+CCB+PD+D.pdf. Acceso 05 enero 2016.

(12) El documento del proyecto establece que los inventarios de carbono no incluyen una zona de amortiguación de un radio de 2,5 km en torno a las aldeas y que esa superficie está destinada a la producción de alimentos. No existe información en los documentos del proyecto que revele si esta

amortiguación refleja la distribución de las zonas de uso tradicional que suelen estar ubicadas mucho más lejos de la aldea que 2,5 km, y que el proyecto de octubre de 2012 citado anteriormente señala en la página 71 que “las personas caminan en promedio entre 5 y 10 km hasta los predios agrícolas”.

(13) *Rainforest Foundation UK* (2015): *Mapping For Rights 2.3: Mai Ndombe REDD+ programme*. <http://blog.mappingforrights.org/?p=1095>

(14) Michael I. Brown (2013): *Redeeming REDD: Policies, Incentives and Social Feasibility for Avoided Deforestation*. Earthscan. Page 141.

(15) *Forest Peoples Programme* (2013): *Impacts of German private sector involvement for Indigenous Peoples and Local Communities in the Mai-Ndombe REDD+ Project in the Democratic Republic of Congo*. Page 16. <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/04/mai-ndombe-infoefpp-case-studyfinal05022014-3.pdf>

PUEBLOS EN ACCIÓN

Los Mauzes: defendiendo territorios y vida

Desde su incorporación oficial a Indonesia en 1969, Papúa tenía sólo siete empresas de palma aceitera hasta el año 2005. Luego la cifra se elevó hasta llegar a 21 empresas en 2014, y hoy hay otras 20 empresas que se disponen a iniciar actividades. En medio de feroces conflictos entre la industria palmícola y los pueblos indígenas afectados, el gobierno central puso en marcha un programa de producción de arroz en un millón de hectáreas, conocido como MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*). La idea del gobierno y los promotores es convertir a Papúa en un centro de producción de alimentos y energía orientados a la exportación. ¿Qué pasará con las comunidades tradicionales de Papúa cuyas vidas dependen de los bosques? “*The Mauzes*” es un documental que muestra las luchas de las comunidades locales por defender sus territorios y tradiciones, y las tácticas y el acoso empleados por las empresas y las fuerzas de seguridad. El video es parte de la serie *Ekspedisi Indonesia Biru*, ahora disponible con subtítulos en inglés.

Ver el video en: <https://www.youtube.com/watch?v=Pch7efib8qo&feature=youtu.be>

La defensa de los bienes comunes: noticias del movimiento Nyéléni

Nyéleni, una plataforma para el movimiento internacional por la soberanía alimentaria, ha puesto a disposición una nueva edición de su boletín el pasado mes de diciembre. En esta ocasión se centra en los bosques, la recolección y los bienes comunes: “*Forests, foraging and the commons*”. El boletín reflexiona sobre la importancia de los bosques, las plantas silvestres y los bienes comunes para la soberanía alimentaria de las comunidades y la gente. También comparte varias experiencias de diferentes partes del mundo. “La protección y la regeneración de diversos ambientes naturales y formas de comer y vivir en armonía con estos ambientes, son elementos esenciales de la soberanía alimentaria. Igualmente importante, son una forma directa de la resistencia a la mercantilización y financiarización de la naturaleza, y a los mercados capitalistas”.

El boletín en inglés puede leerse en: <http://www.nyeleni.org/>

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza ofrece soluciones al cambio climático enfocadas en la Tierra, no en el mercado

El tercer Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza se celebró en París en paralelo a las negociaciones de la ONU sobre el clima. Basando sus dictámenes en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y en la ley internacional de derechos humanos, al tiempo que reconoce el ecocidio como delito, el Tribunal dio una dirección clara en cada caso acerca de quién es responsable y qué debe hacerse para reparar el daño y restaurar la salud y el bienestar de la Tierra (y las comunidades). Pueblos indígenas de todo el mundo tuvieron un rol protagónico en el Tribunal, como

jueces, expertos y testigos. El Tribunal apoyó firmemente el mantener los combustibles fósiles bajo tierra, como un enfoque esencial para evitar mayores daños a la naturaleza. Puede leerse un artículo en inglés sobre el Tribunal en: therightsofnature.org/ron-events/tribunal-offers-earth-driven-not-market-driven-solutions-to-climate-change/

RECOMENDADOS

Niños afrontando desalojos provocados por proyectos financiados por el Banco Mundial

Un artículo de la Red de Reportaje sobre la Alimentación y el Ambiente (“*Food and Environment Reporting Network*”) resalta una investigación que se enfoca en las víctimas ocultas de los proyectos de desarrollo financiados por el Banco Mundial. El estudio muestra cómo los desalojos, la pérdida de ingresos de la familia y otras dificultades asociadas a las represas, carreteras y otros proyectos, pueden ser especialmente perjudiciales para los jóvenes y niños. El caso de un niño de 9 años enfrentado al trauma del desalojo en Indonesia, recogido en el artículo, pone en evidencia cómo los desalojos forzosos pueden afectar psicológicamente a los niños dejándoles síndromes postraumáticos. Según el artículo, los estudios muestran que los niños cuyas familias fueron forzadas a reubicarse también corren mayores riesgos en materia de enfermedades, hambre y educación. A pesar de las declaraciones públicas del Banco Mundial sobre su labor en la mejora de la educación o la reducción de la mortalidad infantil, el Banco está aumentando su apoyo financiero a las represas, las plantaciones de palma aceitera y otras costosas iniciativas que generalmente implican el desplazamiento forzado de un gran número de personas.

El artículo puede leerse en inglés en:

[http://thefern.org/2015/10/children-left-vulnerable-by-world-bank-amid-push-for-development/?utm_source=People+and+Forests+E-](http://thefern.org/2015/10/children-left-vulnerable-by-world-bank-amid-push-for-development/?utm_source=People+and+Forests+E-News&utm_campaign=91780ed9a5-)

[News&utm_campaign=91780ed9a5-](http://thefern.org/2015/10/children-left-vulnerable-by-world-bank-amid-push-for-development/?utm_source=People+and+Forests+E-News&utm_campaign=91780ed9a5-)

[People and Forests E News Oct15&utm_medium=email&utm_term=0_45977cdf4-91780ed9a5-399259537](http://thefern.org/2015/10/children-left-vulnerable-by-world-bank-amid-push-for-development/?utm_source=People+and+Forests+E-News&utm_campaign=91780ed9a5-)

Promesas que se hacen humo: Wilmar no cumple con sanear el negocio del aceite de palma

Un informe realizado por algunos grupos de Amigos de la Tierra muestra que si se rastrea la pista de algunos de los incendios que afectaron a los bosques de Indonesia en los últimos meses, se llega a las empresas que abastecen o son propiedad de Wilmar International. En diciembre de 2013, esta empresa prometió firmemente que se crearían condiciones de sostenibilidad en el sector del aceite de palma. A pesar de nuevas evidencias de que la empresa viola sus propias políticas de “no deforestación”, el informe “*Up in Smoke: Failures in Wilmar’s promise to clean up the palm oil business*” afirma que los grandes inversores de Estados Unidos y Europa no han adoptado medidas sustanciales para hacer frente a los problemas. De acuerdo con la legislación de Indonesia, las empresas son jurídicamente responsables de los incendios.

Puede accederse a la información en: <https://www.foeeurope.org/up-in-smoke-failures-wilmar-s-promise-clean-up-palm-oil-business>

Materiales del WRM en Swahili y Lingala

La publicación “12 respuestas a 12 mentiras sobre los monocultivos de palma aceitera”, que apunta a fortalecer las luchas de todos quienes se están oponiendo a las plantaciones de palma aceitera a gran escala en el Sur global, está ahora también disponible en Swahili y Lingala.

<http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/12-respuestas-a-12-mentiras-sobre-los-monocultivos-de-palma-aceitera/>

Acceso a los PDF:

Swahili: http://wrm.org.uy/fr/files/2013/06/12_responses_Swahili.pdf

Lingala: http://wrm.org.uy/fr/files/2013/06/12_responses_Lingala.pdf

Asimismo, la cartilla “10 alertas sobre REDD para las comunidades”, que tiene como objetivo informar a las comunidades sobre los graves problemas que un proyecto REDD suele causar para las personas involucradas, está ahora también disponible en Swahili y Lingala.

<http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/10-alertas-sobre-redd-para-comunidades/>

Acceso a los PDF:

Swahili: http://wrm.org.uy/fr/files/2012/10/10_Alerts_sur_REDD_Swahili.pdf

Lingala: http://wrm.org.uy/fr/files/2012/10/10_Alerts_sur_REDD_Lingala.pdf

Boletín mensual del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Editor en jefe: Winfridus Overbeek

Redactora responsable: Joanna Cabello

Apoyo editorial: Elizabeth Díaz, Jutta Kill, Flavio Pazos, Teresa Pérez

Secretariado internacional del WRM

Avenida General María Paz 1615 oficina 3. CP 11400

Teléfono y fax: 598 26056943

wrm@wrm.org.uy - <http://www.wrm.org.uy>